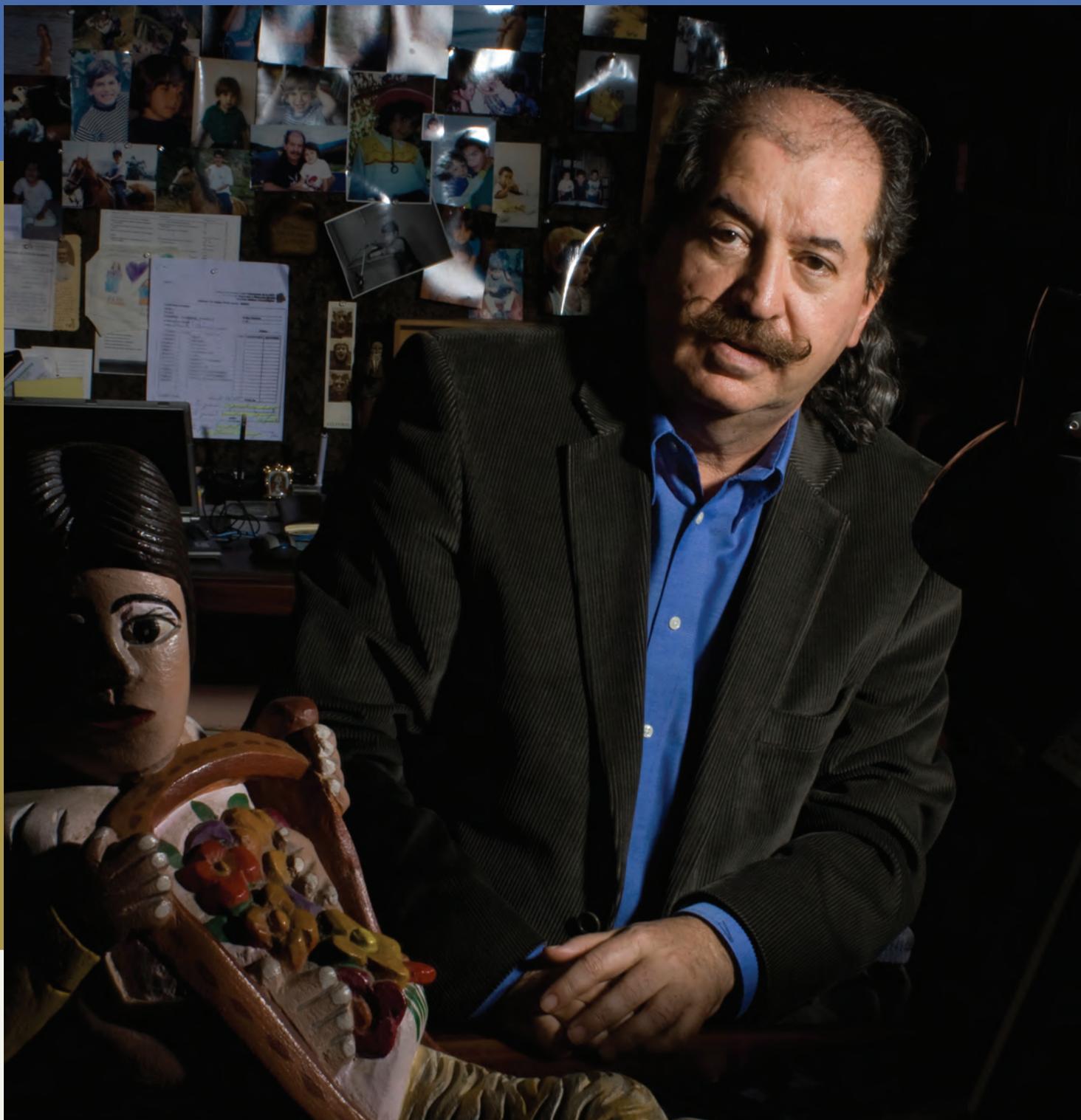


Entrevista con  
**Roberto Briceño León,**  
director del Laboratorio de Ciencias Sociales  
y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela

# «LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO QUEBRARON LOS DIQUES QUE CONTENÍAN LA VIOLENCIA»

La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos. Sus efectos se han distribuido igualitariamente en los diferentes estratos de la población: hoy resulta casi imposible encontrar a una persona que se haya librado de su trágico influjo. La situación se torna mucho más complicada por la actitud del Gobierno hacia el auge delictivo. Mientras que los venezolanos piden a gritos una solución, los funcionarios se limitan a desarrollar una política de no represión, cuyos efectos sociales y psicológicos analiza en el siguiente diálogo el sociólogo Roberto Briceño León



LAS ESTADÍSTICAS oficiales muestran que en apenas diez años se ha triplicado el número de muertes violentas, al pasar de 4.500 a 13.200 casos. Seguramente el sociólogo Roberto Briceño León desearía que el tema objeto de sus investigaciones perdiese el perfil público que en la actuali-

dad ostenta. Pero la violencia no cesa de aumentar. Atrás quedaron los días en que los venezolanos mostraban preocupación por el alza de los precios, la persistencia del desempleo, la escasez de viviendas o el colapso de la red hospitalaria. Inquieta el incremento de los delitos, pero preocupa

mucho más el ensañamiento con el que los criminales someten a sus víctimas. La sociedad está enferma, y cada día que pasa crece la angustia de no acertar con la cura. Con el propósito de discutir este tema de temas, Ramón Piñango, Virgilio Armas Acosta y Rafael Jiménez Moreno, integrantes

Fotografía: Laura Morales Balza

del equipo editorial de *Debates IESA*, decidieron consultar la voz autorizada de Roberto Briceño León. Las siguientes líneas recogen un intento de visualizar la tan esperada luz al final del túnel.

**Los estudios de opinión revelan que los venezolanos tienen en la inseguridad ciudadana su principal preocupación. Un observador externo quizá diría que hay una percepción exagerada, porque en este país siempre ha habido inseguridad. Incluso podría agregar que algunos medios de comunicación social contribuyen a la creación de un clima emocional proclive a la paranoia. En su opinión, ¿cuánto de cierto hay en la preocupación de la gente por el tema de la inseguridad?**

La inseguridad siempre es una percepción, y en tanto que percepción puede o no tener fundamento. En el caso venezolano tiene una base muy sólida: la evolución de los homicidios y el incremento del componente violento del delito.

La sensación de inseguridad no viene solamente por la posibilidad de que me roben el celular, el carro o una determinada cantidad de dinero, sino

más duros que se pueden tomar son los relativos a la tasa de homicidios. La evolución ha sido muy rápida. Venezuela tuvo un incremento estadístico muy fuerte en el año 1989. El promedio anual de homicidios oscilaba, hasta 1988, entre 1.500 y 1.700 casos al año; pero en 1989 aumentó como consecuencia de los trágicos hechos del Caracazo. Posteriormente la cifra ponderada descendería. Volvería a subir de manera importante en el año 1992, debido a los golpes de Estado del 4 de febrero y el 27 de noviembre. En los cinco años siguientes el número de homicidios no disminuyó, sino que aumentó hasta alcanzar un promedio de 4.000 homicidios.

En 1998, cuando Chávez se encontraba en campaña electoral, el país acumuló 4.550 homicidios. Llegados a este punto, el Laboratorio de Ciencias Sociales de la UCV se propuso como tarea la documentación y el estudio de tan preocupante fenómeno. En 2007, nueve años después de llegada al poder la revolución bolivariana, Venezuela registró, en la estadística más conservadora, un total de 13.157 homicidios; una cifra que triplica la obtenida en 1988. Cuando se pasa de 4.500 a 13.200 homicidios al año estamos hablando, sin duda alguna, de un incremento gigantesco

**«En 2007, nueve años después de llegada al poder la revolución bolivariana, Venezuela registró, en la estadística más conservadora, un total de 13.157 homicidios; una cifra que triplica la obtenida en 1988»**

porque, además, existe la posibilidad de que el atraco se efectúe de manera violenta y con un desenlace fatal. Es decir, no fue que dejé el carro y me lo robaron, sino que me pusieron una pistola y se lo llevaron; no fue que me quitaron el dinero, sino que me secuestraron y me obligaron a sacar dinero del cajero. El factor violencia está mucho más presente que antes.

¿Pero cómo podemos mensurar esta inquietante realidad? Los datos

y esa sería la cifra más conservadora, pues si agregamos los muertos en «resistencia a la autoridad» y de los que en la estadística oficial están clasificados como «averiguaciones de muerte», deberíamos sumar unas 15.000 o 16.000 víctimas de la violencia. Este aumento lleva aparejado el ascenso de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, de 20 en 1998 a 49 en 2007, y esta sería también la tasa más conservadora. En conclusión, la

gente no tiene una percepción equivocada. Además, nuestros cálculos indican que por cada persona muerta hay doce personas heridas: no murieron pero quedaron lesionadas. Esto significa que el balance trágico de 13.000 homicidios se complementa, en la cuenta más conservadora, con la bicoca de 150.000 lesionados. No es, pues, un brote de paranoia.

**El ciudadano venezolano no tiene por qué conocer al detalle estas cifras. En su angustia sólo alcanza a preguntarse si la situación empeorará. A su juicio, ¿en los próximos tres años el drama venezolano podría atenuarse?**

Pareciera que no. Los hechos, en su desnudez, nos dicen que esto va a empeorar. No hay ningún componente de política pública que avance hacia la contención del auge delictivo. El verdadero problema de fondo es que se han roto los diques que limitaban la violencia en la sociedad venezolana. Se han derrumbado barreras que no serán fáciles de recuperar.

**¿Cuál sería una de estas barreras?**

El respeto básico al pacto social, a la norma, a las instituciones encargadas del orden público. No olvidemos que las sociedades controlan la violencia mediante regulaciones internas y externas. Las internas tienen que ver con la cultura y los valores; las externas, con la ley y los cuerpos represivos. Sin embargo, en algunas ocasiones estas regulaciones internas y externas simplemente no se cumplen y se instala, para desgracia del colectivo, un sistema de impunidad.

El clima de impunidad que se siente en Venezuela es producto de una mezcla de muchos factores: el quiebre de la ley y de la norma, el descrédito sistemático de los organismos policiales y el discurso oficial a favor de la violencia y los violentos. El ciudadano venezolano comienza a abrigar la sensación de que no hay autoridad ni existe quién lo proteja. Por lo tanto,

muchos toman la decisión de protegerse a sí mismos y hacer justicia por sus propias manos. Esta circunstancia también se manifiesta en el incremento de los linchamientos.

### ¿Hay cifras oficiales sobre los linchamientos?

En verdad muy pocas. Sin embargo, puedo revelar que, según un estudio realizado el año pasado por el Laboratorio de Ciencias Sociales, 67 por ciento de los venezolanos aprueban los linchamientos.

### En otras palabras, aprueban la violencia para acabar con la violencia.

En su desesperación, la población venezolana está perdiendo su capacidad para avistar soluciones institucionales a la crisis de seguridad. Cuando los ciudadanos miran a su alrededor sólo aprecian el fracaso del pacto social y el crónico incumplimiento de la norma.

**Cuando el ciudadano se siente tan acosado sólo quiere que protejan su vida con medidas aplicables a corto plazo. El discurso administrativo de largo plazo no le despierta mucha confianza, porque teme, con razón, que no alcance a vivir ese horizonte temporal. De ahí que se sienta atraído por soluciones extremas y radicales, a veces llenas de violencia.**

En el Laboratorio de Ciencias Sociales no nos gusta utilizar la expresión «respuesta violenta», preferimos en cambio referirnos a la noción de «represión para aplicar la ley», lo cual es muy distinto al linchamiento, que es una acción ilegal. La clave del éxito estriba en hacer cumplir la ley, las normas. Pero la cotidianidad parece demostrar que el Gobierno no se esfuerza lo suficiente para garantizar la observancia de las normas. De hecho, si algo se puede inferir de la política de seguridad de Hugo Chávez en estos nueve años es la decisión de no reprimir.

### ¿En verdad es una decisión consciente de no reprimir?

Efectivamente, es una política. Es una decisión consciente. Yo incluso lo he discutido con ministros y altos funcionarios, quienes me han corroborado que la orden clave es no reprimir.

### ¿Qué argumento racional pudiese justificar no actuar frente a la violencia?

El Gobierno chavista no quiere proyectar ante los sectores populares una imagen de Gobierno represivo. Tampoco desea ser visto ante los ojos de sus potenciales aliados tácticos y

**«El clima de impunidad que se siente en Venezuela es producto de una mezcla de muchos factores: el quiebre de la ley y de la norma, el descrédito sistemático de los organismos policiales y el discurso oficial a favor de la violencia y los violentos»**

estratégicos en el mundo como un régimen autoritario. La verdad es que el gobierno no tiene un Plan B que salga al auxilio de los magros resultados de la no represión, tal como lo demuestra la ausencia de respuesta institucional ante los abusos cometidos, por ejemplo, por los colectivos subversivos del 23 de enero.

**La violencia ha estado presente en Venezuela por lo menos en los dos últimos siglos. No solamente la violencia política, sino también la violencia contra niños y mujeres, contra campesinos y sectores desvalidos socialmente. Todo lo anterior puede llevar a preguntar si en Venezuela lo realmente novedoso no es la violencia, sino más bien la masificación de los medios para ejecutarla. De hecho, en la actualidad son muchos los ciudadanos que portan armas.**

Por supuesto que la difusión de armas es un factor que genera mayor letalidad. Pero, antes de analizar este fenó-

meno, deseo precisar algo importante: no es que la sociedad venezolana sea violenta, sino que las sociedades son violentas. Es decir, la pulsión agresiva acompaña y ha acompañado siempre a todos los conglomerados humanos, forma parte de la vida social. De alguna manera, la violencia es normal. ¿Pero qué ocurre? Que siempre está «normatizada».

La sociedad rural tenía un nivel de violencia determinado. Cuando Venezuela se urbaniza se produce una serie de cambios orientados al establecimiento de instituciones: se crea un ejército nacional y una red de organis-

mos policiales. De alguna manera, se va moldeando una sociedad que intenta colocarle controles a la violencia individual por intermedio del Estado. ¿Pero qué sucede? Que esta sociedad de violencia normada y supervisada, vista bajo el cristal de la impunidad de nuestros días, se nos antoja más bien como una sociedad poco violenta. De hecho, en la segunda parte del siglo XX la tasa de homicidios más alta registrada en Venezuela fue menor que la tasa de homicidios más baja producida en Colombia durante ese mismo período. Lamentablemente, hoy Venezuela presenta una tasa de homicidios mayor que la de Colombia: Venezuela tiene 49, Colombia 39. Como se puede apreciar, comparativamente, la sociedad venezolana no era violenta.

### ¿Entonces qué ha pasado?

Lo que ha pasado es que las políticas adoptadas por el Gobierno lograron quebrar elementos básicos del control interno y externo de la violencia. La decisión oficialista de no reprimir envió un mensaje de impunidad a la

clase delincuente, porque en la práctica equivalía al incumplimiento de la ley. Por ejemplo, ¿cómo puede interpretarse el desarme de la Policía Metropolitana y el continuo desprestigio de los organismos de seguridad?

## «La gente se armará. Se crearán comités de limpieza social. Los linchamientos se harán más frecuentes. Aumentará el número de casos de sicariato para solucionar privadamente lo que públicamente no se puede solucionar»

Un ciudadano honesto analiza estos hechos de una manera pesimista, sea chavista u opositor. Pero el delincuente los analiza de una manera optimista, porque equivale a una oportunidad para desarrollar su comportamiento ilegal. Una pregunta aún más incómoda: ¿cómo puede interpretarse el minuto de silencio solicitado a raíz del fallecimiento del guerrillero alias Raúl Reyes? Es obvio que con estas posturas el señor presidente ha contribuido a quebrar los elementos básicos del pacto social. En el Gobierno tienen una confusión notable entre lo que significa el respeto a los derechos humanos y lo que entraña el deber de hacer cumplir la ley.

### ¿Cuáles son las acciones concretas que esperan los venezolanos del Estado?

La gente en el fondo lo que espera es una recuperación del pacto social ¿Y qué significa esto? El respeto a la norma y el reforzamiento de las instituciones. También pide que la aplicación de la ley sea inmediata.

### Pero parecen más bien metas de largo plazo.

No creo. Son acciones que pueden iniciarse en el corto plazo.

### ¿Por ejemplo?

Por ejemplo, en cada una de las decisiones policiales y de inteligencia de un Gobierno que esté sinceramente com-

prometido con el cumplimiento de la ley y la protección integral de la vida. Esto exige, por ejemplo, que las autoridades no repitan nunca más ese concepto disparatado de la policía insurgente y socialista. ¿Cómo puede confiar el país

en una policía definida por el propio ministro del Interior y Justicia como insurgente? No hay manera de entender esta noción de policía insurgente. Los policías se encargan de meter presos a los insurgentes; mientras que los insurgentes se rebelan contra los policías. Pensar en lo contrario es imposible.

### Recientemente pudimos apreciar cómo los policías eran incapaces de enfrentar a los grupos subversivos de la parroquia 23 de enero.

Nadie puede garantizar que no explote una situación de anarquía en un momento determinado. Pero una vez ocurrida esa transgresión, de inmediato las autoridades gubernamentales deben manifestar con contundencia su voluntad de reinstaurar el orden público, porque allí donde la policía no puede actuar el Estado simplemente no existe, es una entelequia.

Lamentablemente, en estos momentos, lo que uno menos aprecia es una voluntad clara del Estado de proteger al ciudadano. Lo que sí pareciera existir es un conjunto de instituciones policiales preocupadas por proteger a funcionarios y autoridades de la administración pública. De hecho, casi no se habla de seguridad ciudadana sino de seguridad de Estado, de seguridad nacional.

### Su análisis revela que el problema es más bien político.

Sin lugar a dudas. Totalmente político.

### ¿La famosa voluntad política?

No es sólo una voluntad, es también un lenguaje. ¿Qué es en esencia lo político? Es el pacto de convivencia que tienen las personas. Cuando uno ve la evolución de los homicidios en Venezuela uno se pregunta qué pasó entre los años 1994 y 1998 que las estadísticas se estabilizaron, e incluso descendieron un poco. Había una disposición política de poner orden, de crear condiciones de tranquilidad. Con todos los desaciertos que pudiesen imputársele al segundo gobierno de Rafael Caldera, lo cierto es que existía un ministro del Interior que se atrevió a decir «señores, no doy más permisos de armamentos, aquí no permitimos la violencia». En fin, algo pasó. Alguna política hubo de existir, porque en cuatro años la estadística se mantuvo.

¿Pero que sucedió después? Que el pacto político se rompió. Y se rompió en la medida en que el propio presidente irrespetó continuamente la norma. Empezó a hablarse de cosas como que si la constitución no servía se cambiaba, que no importaba que las leyes no se aplicasen. También se hablaba continuamente de la guerra, de que estábamos en un enfrentamiento.

Esta descomposición social no se podrá detener si no hay una decisión política en el sentido de decir «vamos a controlar el delito», «vamos a restaurar la ley y el pacto social que nos regula a todos», «vamos a reprimir, aprehender y castigar a todos aquellos que no quieran aceptar la norma». Eso es lo que la gente espera: que el gobierno los proteja.

### ¿Sirve realmente a la ciudadanía un Estado que, en aras de la popularidad, no reprime la violencia? ¿No se da cuenta ese mismo Estado, seguidor de las encuestas, que está incurriendo en un alto costo político por no hacer algo para detener el auge delictivo?

La racionalidad que está detrás de la postura chavista es difícil de entender. Tengo la impresión de que

el Gobierno no logra hacer calzar su proyecto político con un plan de seguridad para las personas. Hay un cortocircuito entre la idea revolucionaria, subversiva, y lo que significa una estrategia integral de lucha contra el delito.

### O sea, que la revolución no es orden.

Sin lugar a dudas, la revolución no es orden. Por el contrario, es desorden. Está implícito en la etimología de la palabra: romper con un orden. Al abandonar la oposición y asumir las riendas del poder, al presidente Chávez se le presentó un dilema político irreconciliable: ser revolución o ser Gobierno. Cuando se es Gobierno hay que actuar en la dirección del orden: ofrecer y garantizar servicios de seguridad a la población. Cuando se es revolución hay que estar quebrando las instituciones, generando una política de conflictividad y de lucha social. Las dos cosas juntas, ser gobierno pero también ser revolución, es algo demasiado complicado.

### De acuerdo con la experiencia vivida en otros países, ¿es reversible este cuadro de inseguridad social?

Por supuesto. El ejemplo más claro y evidente lo tenemos al lado de nosotros, en Colombia. Allí, la voluntad política de cooperar entre los distintos actores, de sostener una línea estratégica de seguridad, hizo posible el cambio que hoy puede corroborarse. En 1997 Colombia tenía una tasa de homicidios de 67 por cada cien mil habitantes; Venezuela tenía 20. Once años después, en el año 2007, Colombia tiene una tasa de 39 y Venezuela tiene 49.

Exactamente al contrario. Hoy, Bogotá es una ciudad muchísimo más segura que Caracas. La tasa de homicidios de Bogotá es 26 por cada cien mil habi-

## «En el Gobierno tienen una confusión notable entre lo que significa el respeto a los derechos humanos y lo que entraña el deber de hacer cumplir la ley»

tantes, la de Caracas es 130. Entonces, ¿que ha ocurrido? Lo primero es una convicción generalizada de que la inseguridad no es una maldición, sino un fenómeno social que puede revertirse. Es en esencia un asunto político: política como voluntad de convivencia. Cuando hay armas se suelen resolver los conflictos a tiros. Pero cuando hay una policía que protege y recibe las denuncias de la gente, y un tribunal que imparte justicia a tiempo, las cosas son muy diferentes.

### ¿Cuál sería la prioridad al iniciar una política de seguridad ciudadana?

La emisión de un mensaje claro de que se va a imponer la norma y se va a cumplir la ley. Si no existe este trasfondo de principios básicos, ninguna de las acciones que se emprendan tendrá impacto. Debe existir una voluntad política que se exprese en una acción policial contundente, con capturas, que se vea a los funcionarios actuando contra el delito, que se aprecie a los delincuentes detenidos y llevados frente a los tribunales. Quizás tanto rigor no sea lo más bonito ni lo más vistoso, pero tiene que darse. Además, son necesarias otras

medidas: un plan de desarme, una política de preservación del orden público, regulación de establecimientos de venta de alcohol y jornadas de

cultura ciudadana. Tienes también que mejorar la calidad de las policías, no desprestigiarlas.

### ¿Cuál sería la respuesta de la sociedad venezolana si la situación de inseguridad se mantiene en los actuales niveles o, peor aún, se agrava?

Creo que cada vez más la gente expresará su dolor e indignación de manera pública y exigirá enérgicamente el establecimiento de responsabilidades. En este sentido, se incrementará la protesta social. También se multiplicarán los comités de víctimas. Algunos sectores de la sociedad caerán en la tentación de hacer justicia por su propia mano. La gente se armará. Se crearán comités de limpieza social. Los linchamientos se harán más frecuentes. Aumentará el número de casos de sicariato para solucionar privadamente lo que públicamente no se puede solucionar. Finalmente, existirá un incremento de la seguridad privada. Las personas se van a encerrar más. De hecho, en los barrios ya están cerrando las veredas y las escaleras para ponérsela más difícil a los delincuentes y tener un poco de tranquilidad. 



## VALORACIÓN DE PROYECTOS | MIGUEL NAJUL



0212-555.44.60  
libreria@iesa.edu.ve

La valoración es quizás la disciplina gerencial más exigente, porque pone a prueba los conocimientos necesarios para analizar un proyecto y su entorno. Esta es la base de Valoración de proyectos, un libro que expone, de manera sencilla y recurriendo a ejemplos prácticos, los lineamientos teóricos de la valoración de negocios. La obra incluye un CD con una amplia muestra de modelos matemáticos diseñados en hojas de cálculo, que propone pautas para proyectar cuentas y variables.

**MIGUEL NAJUL** es profesor invitado en el IESA y consultor en las áreas financieras, bancarias y de control de riesgos, así como en las de evaluación y planificación de proyectos.